

C.A. de Santiago

Santiago, diecinueve de junio de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Francisco Cox Vial, por sí, quien interpone reclamo de ilegalidad conforme al artículo 9° de la ley N°20.285, en contra de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público y de la Dirección Ejecutiva Nacional, por denegación de información de fecha 1 de junio de 2023, mediante Oficio Carta DEN/LT N°421/2023, de esta última entidad. Lo anterior, respecto de las solicitudes de acceso a la información vía transparencia, de folios N°19.373 y 19.375. Pide se acoja el presente reclamo de ilegalidad, ordenando a dicha institución que entregue la información referida.

Detalla que el 2 de mayo de 2023, ingresó una primera solicitud de información vía transparencia, a través de la plataforma SIAU “Fiscalía Transparente” habilitada para este propósito, donde le fue asignado Folio Solicitud N°19.373. En síntesis, para realizar un análisis estadístico respecto a la evolución de los delitos contemplados en la ley 20.000 (sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas), y en la ley 17.798 (sobre control de armas cometidos), cometidos por individuos pertenecientes a las fuerzas armadas y las de orden y seguridad en nuestro país, piden un informe del periodo entre los años 2017 y 2023, respecto número de funcionarios que hayan sido “formalizados” por delitos contemplados en cada una de estas leyes, haciendo expresa mención al delito específico cometido, respecto a los funcionarios pertenecientes a Gendarmería de Chile, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Servicio Nacional de Aduanas, Fuerzas Armadas de Chile.

Agrega que, con la misma fecha, ingresó Solicitud N°19.375 que, en el mismo contexto antes expresado y por el mismo periodo, requiere se le informe el número de funcionarios de las instituciones antes enunciadas, que hayan sido “condenados” por delitos contemplados en la ley 20.000 y 17.798, haciendo expresa mención al delito específico cometido.

Reclama que, sin mediar comunicación oportuna respecto a la prórroga del plazo de 20 días hábiles otorgado por la ley 20.285, o la necesidad de subsanar defectos en la solicitud, recién el día 1 de junio del año 2023, una vez transcurridos 22 días hábiles desde la recepción de las solicitudes, fue notificado vía correo electrónico del rechazo de ambas



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BPYLXXXRFH

solicitudes, a través de Oficio Carta DEN/LT N°421/2023.

La respuesta a su solicitud refiere que la base de datos del Ministerio Público, denominada Sistema Informático de Apoyo a los Fiscales (SAF), es el principal repositorio de información del Ministerio Público y, por ende, la fuente primaria de extracción de datos, el cual contiene cifras de los delitos que se han cometido en el país, en un periodo determinado de tiempo en base a descriptores previamente establecidos. Agrega que el sistema SAF, contiene la etiqueta “funcionario público”, ésta es una genérica, y no especifica la Institución a la que pertenece el imputado.

En consecuencia, al carecer del parámetro de búsqueda que permita determinar si los imputados pertenecen o no a las Instituciones señaladas, no es posible para el Ministerio Público obtener de manera automatizada la información requerida.

Dado lo anterior, en la práctica, para poder dar respuesta a toda la información solicitada, ello implicaría revisar un elevado volumen de carpetas investigativas por los delitos indicados y para un período de tiempo de más de cinco años, y cuyas carpetas por lo demás no se encuentran en sus dependencias, sino que, en cada una de las unidades operativas del Ministerio Público, que son las Fiscalías Locales, por lo que se torna en una tarea imposible de llevar a cabo.

Finalmente, no es posible entregar la información solicitada, por cuanto, la situación antes descrita configura evidentemente la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N°1 letra c) de la ley N°20.285, que permite al órgano requerido denegar la entrega de la información, aduciendo que no cuentan con los recursos humanos ni materiales para realizar esta labor.

Estima que la decisión comunicada por la Fiscalía Nacional, a través de la Directora Ejecutiva Nacional de no entregar la información pública requerida es ilegal y arbitraria. Enseguida, hace referencia al marco normativo aplicable y pasa a delimitar el concepto de información pública, conforme al artículo 5° inciso segundo de la ley N°20.285.

Segundo: Que comparece María Ximena Rivas Asenjo, Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Público, quien evacúa informe respecto del recurso incoado, solicitando su total rechazo, con costas.

Expresa que el reclamante busca que se entregue por vía de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, información que no se



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BPYLXXXRFH

encuentra disponible o desagregada en el principal repositorio del Ministerio Público, esto es, el Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF), toda vez que no existe el criterio de búsqueda de información requerido por el solicitante, esto es, la institución pública a la cual pertenecen imputados que hayan sido formalizados o condenados, lo cual supone una revisión de carpeta por carpeta investigativa para determinar si existe coincidencia con lo consultado, distrayendo indebidamente a los funcionarios de esta Institución del cumplimiento regular de sus funciones habituales, en el caso de que se accediera a la solicitud formulada. Enfatiza que lo anterior, se encuentra en concordancia con lo dispuesto en el artículo 21 N°1 letra c) de la Ley N° 20.285, dando que cuenta de que se trata de una excepción al principio de publicidad.

Se remite a los fundamentos de la carta mediante la cual se denegó la entrega de la información, correspondientes a la concurrencia de la causal antes expresada, por no existir un criterio de búsqueda que permita encontrar información específica referida a la institución pública a la que pertenece cada funcionario público en calidad de imputado, y a lo establecido en los artículos 5° y 10 de la ley N° 20.285, referidos a que los organismos públicos no están obligados a generar, elaborar o producir información no existente.

Efectúa descargos, en tanto indica que el Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF) es un sistema informático con el que trabaja diariamente el Ministerio Público, a través del cual se efectúa un seguimiento, registro y gestión de investigaciones penales de la Fiscalía de Chile, correspondiendo éste al respaldo digital de las actividades desarrolladas por los fiscales adjuntos en el curso de una investigación penal. Precisa que la información se expresa en un sistema de códigos asignados para cada tipo penal y/o categoría de delitos.

En este sentido, pormenoriza que el referido sistema informático no permite identificar si un imputado pertenece o no a una institución pública en particular, como lo son las aludidas en las solicitudes de la especie. Por lo tanto, la decisión de no entregar lo requerido no ha sido en ningún caso “ilegal y arbitraria”, como lo expresa el reclamante, puesto que en la Carta DEN remitida, se expresan los argumentos de hecho y de derecho por las cuales se invoca.

Advierte, a su vez, que en su respuesta nunca señala que el SAF sea



la “única” fuente de información. Al contrario, indica expresamente que el SAF “es el principal repositorio de información del Ministerio Público y, por ende, la fuente primaria de extracción de datos”.

Aclara que el Banco Unificado de Datos se encuentra concebido como una forma de trabajo enfocada en mejorar la coordinación institucional, dotando de mayor eficacia a la labor investigativa y de prevención de los delitos en relación a las instituciones involucradas en la persecución de éstos, en el ejercicio de sus competencias, no para la extracción de información estadística, además que no posee un parámetro que permita identificar si un imputado es un funcionario público, como tampoco si éste pertenece a una institución pública en concreto.

En cuanto al Sistema de Análisis Criminal y de Focos Investigativos, da cuenta que no es una “plataforma”, sino que es una estructura orgánica de funcionamiento de unidades dentro del Ministerio Público, y la información que analiza SACFI está orientada a la persecución penal; busca tomar datos y convertirlos en información relevante para la toma de decisiones de persecución. Precisa que estos datos se extraen, primordialmente, desde la misma información existente en el SAF, reiterando que esta no indica la profesión u oficio específico de un imputado, ni la institución pública a la cual podría pertenecer. Por otro lado, no existe en tal sistema alguna plataforma que permita entregarla, sin que implique la producción de información no existente, lo cual tendría como consecuencia directa destinar funcionarios del Ministerio Público a cumplir la tarea de revisión pertinente.

En definitiva, concluye fundadamente que el Ministerio Público no ha incurrido en ilegalidad alguna al denegar lo solicitado por la parte reclamante en sus requerimientos singularizados con los folios SIAU ID. N° 19373 y SIAU N°19375, toda vez que se le entregó toda aquella información con la que cuenta esta Institución y la causal de rechazo en que se ampara la no entrega de los datos se encuentra específicamente argumentada y apoyada en el texto de la ley N° 20.285, por lo que corresponde desestimar el reclamo de ilegalidad de autos.

Tercero: El presente arbitrio -reclamo de ilegalidad por denegación de acceso a la información pública- se encuentra contemplado en el artículo 9° inciso 3° de la ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública, el que prevé que vencido el plazo para que el Ministerio Público entregue la información requerida o denegada la petición por alguna de las causales



autorizadas por la ley, el solicitante podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva, de conformidad con lo dispuesto en sus artículos 28, 29 y 30 del referido cuerpo normativo.

Cuarto: Que, como se sabe, el artículo 28 de la Ley N°20.285, exige, además, que el recurso de reclamación en contra de la resolución del Ministerio Público, según el artículo 9° del mismo texto legal, que deniegue el acceso a la información, debe ser deducido ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, en el plazo de quince días corridos, contado desde la notificación de la resolución reclamada, deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se formulan.

Quinto: Que, por otra parte, el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República señala: *“Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, **cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos**, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”*.

Por su parte, el N° 1 del artículo 21 de la LT refiere: *“Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 1.- Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento **afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido**, particularmente: ... c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.*

Sexto: Que, entonces, nuestro ordenamiento contempla el principio general por el cual los actos de la Administración, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen en su génesis, son públicos, regulándose en la ley N°20.285, Ley de Transparencia, precisamente, el ejercicio de este derecho, o sea, como dice su artículo 1°, *“el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información”*.



Séptimo: Que, así las cosas, dicho principio no es absoluto y reconoce las excepciones que la propia Ley de Transparencia prevé, entre ellas, aquellas que se encuadran en el N° 1 de la citada ley, de suerte que por el mero hecho que la información solicitada esté en poder del Ministerio Público, no se convierte en pública si es que, en este caso, se le aplica alguna de las causales de reserva que la ley contempla, como la transcrita en el motivo quinto.

Octavo: Que, como primera cuestión, cabe señalar que el Ministerio Público no es un centro de datos estadísticos, sino que es el organismo encargado de la persecución penal del país, conforme a su mandato constitucional y legal.

Luego, si bien el Ministerio Público posee un Sistema de Apoyo a Fiscales y un Banco Unificado de Datos, estos no gozan de una plataforma que permita entregar la información que solicita el reclamante, sin que aquello no considere la producción de información no existente, ya que no cuenta con “sistemas unificados” en los cuales se puedan acceder a las carpetas investigativas en formato digital, como invoca la reclamante.

Noveno: Que el reclamado ha indicado reiteradamente que el Sistema de Apoyo a Fiscales y el Banco Unificado de Datos están pensados como una forma de trabajo enfocada en mejorar la coordinación institucional, dotando de mayor eficacia a la labor investigativa y persecución de los delitos por parte de las instituciones policiales, pero no para la extracción de información estadística, además que no posee un parámetro que permita identificar si un imputado es un funcionario público, como tampoco si éste pertenece a una institución pública en concreto.

Décimo: Que, en consecuencia, no se advierte ilegalidad en el actuar del Ministerio Público -y el presente arbitrio es uno, precisamente, que cuestiona la legalidad de lo obrado por dicho Ministerio Público- pues, evidentemente, concurre en el caso *sub judice* la causal de reserva hecha valer por el ente persecutor, esto es, la del artículo 21 N°1, letra c) de la ley N°20.285, toda vez que la publicidad de la información solicitada turba o embaraza el adecuado ejercicio de las tareas que le corresponde desempeñar al organismo reclamado, quien debe velar porque el uso de los recursos fiscales se empleen para el objeto a que están destinados, la persecución penal, impidiendo que se ocupen ilegítimamente, en perjuicio del patrimonio fiscal, al designar un funcionario del Ministerio Público para que



emprenda la labor de recopilar, analizar y sistematizar a lo largo de las distintas Fiscalías Locales del país las respectivas carpetas investigativas que el recurrente espera se revisen, lo que constituye una evidente distracción de quienes trabajan en esta institución de sus labores habituales.

Undécimo: Que, por lo razonado, la presente reclamación deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo que disponen los artículos 9 inciso 3°, 28, 29 y 30 de la ley 20.285, sobre acceso a la Información Pública, **se rechaza** la reclamación interpuesta por el abogado Francisco Cox Vial en contra del Ministerio Público.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactó la abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

N°Contencioso Administrativo-407-2023.

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por la abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BPYLXXXRFH

Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristobal Mera M., Tomas Gray G. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, diecinueve de junio de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a diecinueve de junio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BPYLXXXRFH